

RESEÑAS

TOMMIE SUE MONTGOMERY, *Revolution in El Salvador: Origins and Evolution*, Boulder, Westview Press, 1982, XIV + 252 pp.

ENRIQUE A. BALOYRA, *El Salvador in Transition*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1982, XVIII + 236 pp.

Hay lecturas que nos parecen interminables y tediosas. Otras, desearíamos que se prolongaran indefinidamente, que no terminaran jamás. Los dos libros que nos ocupan son de este último género. Ambos se refieren al mismo tema general (el desenvolvimiento político y social de El Salvador) en un mismo período (de 1931 a la fecha). Esto no significa que haya competencia o rivalidad: de manera fortuita, los libros se refuerzan mutuamente y se complementan hasta un grado que los autores no habrían conseguido si se lo hubieran propuesto de antemano. Ambos investigadores buscan las raíces de la crisis social que padece actualmente "el pulgarcito de América". Baloyra hace un recuento a partir de 1870 (cuando se da la revolución liberal y se lleva a cabo una drástica redistribución de las tierras) y extiende su análisis hasta 1948 (año en que se instala un gobierno militar autoritario para introducir reformas sociales y económicas que permiten el inicio de la modernización del país). Por su parte, Montgomery ofrece un apretadísimo resumen de historia en el que se apega a la idea de Murdo MacLeod (*Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520-1720*, University of California Press, Berkeley, 1973) de los ciclos de producción: el ciclo del cacao (de 1521 a fines del siglo XVI), el del añil (de fines del siglo XVI a mediados del siglo XIX) y el del café (de mediados del siglo XIX al presente); luego estudia la evolución del Estado entre 1932 y 1979.

Baloyra analiza minuciosamente el período que va de 1948 a octubre de 1979. Centra su atención en la vida política del país siguiendo el esquema teórico de Salvador Giner ("Political Economy and Cultural Legitimation in the Origins of Parliamentary Democracy: The Southern European Case", ponencia presentada a la Mesa Redonda sobre la Transición del Autoritarismo a la Democracia en el Sur de Europa y en América Latina, celebrada en Madrid en diciembre de 1979). De este esquema surge el concepto de "despotismo reaccionario", aplicado a las formas de dominación de la oligarquía que prevalecieron en El Salvador desde la Segunda Guerra Mundial hasta el golpe

militar del 15 de octubre de 1979. (Nicolás Mariscal analiza el mismo período aplicando esquemas de Juan Linz en "Regímenes políticos en El Salvador", *Estudios Centroamericanos*, núm. 365, marzo de 1979, pp. 139-152.) En estos años, hubo gobernantes que trataron de solucionar problemas económicos básicos y de dismantlar el "cuadrado mágico" de dominación oligárquica (control sobre la tierra, la producción agrícola y su distribución, el comercio exterior y las finanzas). En efecto, no han predominado en Centroamérica regímenes de seguridad nacional o autoritarios burocráticos, sino que algunos gobiernos han desafiado el poder de la oligarquía. (Véase E. Baloyra, "Fandango y fantasía de la cuestión centroamericana", en E. Baloyra y R. López Pintor [eds.], *Iberoamérica en los años ochenta: perspectivas de cambio social y político*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1982, pp. 77-93.) No obstante, es a partir de 1979 que el "cuadrado mágico" empieza a desmoronarse realmente con las reformas que nacionalizan la porción más importante de las finanzas privadas (bancos y asociaciones de ahorro y préstamo) así como el comercio exterior del azúcar y el café, y con la reforma agraria que modifica el esquema de tenencia de la tierra. Baloyra sostiene que dichas reformas han provocado, pese a sus fallas, un cambio importante en la relación de fuerzas entre facciones de la coalición gobernante. El problema actual, dice el autor, reside en que una parte de la coalición quiere terminar de romper el "cuadrado mágico", mientras que otra se empeña en volver al despotismo reaccionario.

Por su parte, Montgomery analiza los regímenes salvadoreños con la hipótesis más pragmática de que a partir de 1932 la vida política del país sigue un comportamiento cíclico cuyas etapas son las siguientes: consolidación del nuevo régimen; intolerancia creciente frente a la disidencia y mayor represión; respuesta del pueblo y de una facción progresista de oficiales de las fuerzas armadas; golpe de Estado, dirigido por esos oficiales; promulgación de reformas; resurgir, en las fuerzas armadas, de la facción más conservadora; consolidación del poder conservador una vez más. A lo largo de varios ciclos, la autora observa dos constantes: la presencia de un partido con propósitos de control político (creado por Hernández Martínez en los años treinta) y el uso reiterado de la represión como medio de control social cuando falla la persuasión, lo que vincula en ocasiones la fuerza pública a los intereses de la oligarquía. La autora sostiene que el poder económico se ha mantenido sin cambios profundos, y que las reformas no han afectado mayormente a quienes generan y distribuyen la riqueza. Entre 1932 y 1982, Montgomery distingue seis ciclos: 1) la dictadura de Hernández Martínez (1932-1944), 2) las tiranías de Osmín Aguirre y Castaneda Castro (1944-1948), 3) el gobierno reformista de Oscar Osorio (1948-1960), 4) los regímenes presidencialistas de Julio Rivera y Fidel Sánchez Hernández (1960-1972), 5) los regímenes reformistas y represivos de Molina y Romero (1972-1979) y 6) el régimen de transición (desde octubre de 1979 hasta el momento de terminar el libro, en 1982) que Montgomery califica de "descenso a la anarquía". La autora afirma que en este último ciclo emergen dos nuevos actores políticos: la Iglesia, que se presenta como agente promotor del cambio, y las organizaciones revolucionarias, que

muestran una increíble capacidad de sobrevivencia y adaptación a circunstancias adversas.

Baloyra se mantiene a distancia de los hechos y ajusta un enfoque teórico a una realidad concreta. Montgomery cree en un determinismo histórico y está comprometida con una causa, lo que no afecta la calidad académica de su trabajo. (Cuando Montgomery escribía su libro, participó en un diálogo muy interesante y revelador con Robert White, quien era embajador de Estados Unidos ante el gobierno de El Salvador. El diálogo ilustra las diferencias entre enfoques comprometidos de distintos tipos. Véase "U.S. Response at the Crisis in El Salvador: A Dialogue between U.S. Ambassador to El Salvador, Hon. Robert White and Dr. Tommie Sue Montgomery", Occasional Paper Series, Florida International University, 1980.) No obstante las diferencias de enfoque, los libros se complementan. Por ejemplo, Montgomery estudia el papel de la Iglesia en el desarrollo social y político de El Salvador después de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín (1970), tema que ocupa muy poco espacio en la obra de Baloyra. Éste, a su vez, presenta un magnífico ensayo sobre los partidos políticos salvadoreños, sin contrapartida en el otro estudio. En cambio, Montgomery ofrece un exhaustivo análisis de los que nombra "revolucionarios" (los movimientos político-militares y las organizaciones populares de masas): examina su formación y evolución, sus ideologías, sus programas de acción y los puntos más sobresalientes del plan de gobierno que aplicarían al triunfar, así como las formas en que han organizado a la población de las áreas que dominan. Baloyra, por su parte, estudia con más detenimiento la política de Reagan hacia El Salvador.

Los dos libros terminan con un examen de las elecciones para formar una asamblea constituyente encargada de diseñar un nuevo pacto social y de nombrar un presidente con el cual compartiría el poder que normalmente corresponde al Ejecutivo. Montgomery analiza las elecciones desde su punto de vista de intelectual comprometida. Toma en cuenta el surgir de nuevos partidos y sus inclinaciones ideológicas y programáticas, y explora el significado de la lucha electoral como medio para legitimar el poder de la derecha. También observa las reacciones de la oposición frente a esta contienda y señala brevemente los resultados de la misma. Concluye el libro diciendo: "Ninguna solución política viable y duradera es posible en El Salvador sin la participación del Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Resta ver cuánta más sangre deberá correr antes de que el gobierno de Estados Unidos acepte ese hecho fundamental." Baloyra titula su último capítulo "Ilusión y realidad", en el que presenta su visión del proceso electoral como científico y como testigo presencial. Expone la campaña de los principales partidos, narra experiencias personales y luego examina el resultado de la votación. El autor describe una elección con opciones limitadas que se llevó a cabo de manera relativamente ordenada, no obstante graves actos de intimidación de varios grupos; el recuento de los votos, según Baloyra, no fue falseado. Los votos se repartieron entre la Democracia Cristiana (PDC), que el autor considera de centro-izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha y extrema derecha. Baloyra dice que el principal

beneficiario de las elecciones fue la derecha y el principal perdedor la guerrilla; con ello expresa una vocación democrática pero sus argumentos no convencen. Afirma que Reagan podría colaborar con "un gobierno democráticamente elegido". La coalición que lo domina, sin embargo, no goza de la simpatía del Congreso norteamericano, que tal vez corte la ayuda económica y militar de Estados Unidos a El Salvador. Baloyra opina que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) es un elemento importante, capaz de impedir que la extrema derecha arrolle al PDC. Sin embargo, el tiempo ha mostrado que las elecciones no resolvieron ninguno de los principales problemas de la transición hacia un gobierno elegido directamente por el pueblo salvadoreño, en un auténtico juego democrático.

Pese a la buena intención de Baloyra, no compartimos sus conclusiones. Trabajos académicos tan serios como el suyo, realizados por investigadores de varias nacionalidades, muestran que el proceso electoral de 1982 tuvo serias deficiencias. (Véase el editorial "Las elecciones y la unidad nacional: diez tesis críticas", *Estudios Centroamericanos*, núm. 402, abril de 1982, pp. 233-258; Jack Spence, "Media Coverage of El Salvador's Election", *Socialist Review* 13, núm. 2 [marzo-abril de 1983], pp. 29-57; y también Daniel Tzur, "Elecciones en Centroamérica", *Estudios Centroamericanos*, núm. 402, pp. 259-270.) En contra de lo que afirma Baloyra, se puede esgrimir varios argumentos: no participaron las agrupaciones políticas de izquierda; hay evidencia de que el gobierno, sobre todo, intimidó a la población abierta o veladamente para obligarla a votar; los resultados finales sí indican que el recuento fue manipulado. El editorial de *Estudios Centroamericanos* expone pruebas de que hubo un fraude masivo. Jack Spence hace ver que según el cálculo final habría votado 115% de los electores. Basándose en comparaciones con el caso de Zimbabwe, Spence concluye que la guerra civil y el estado de sitio invalidan todo ejercicio electoral. Cabe añadir que un mes después de las elecciones, el general Guillermo García, Ministro de la Defensa, manipuló la asamblea constituyente para que nombrara al doctor Álvaro Magaña presidente de la República. Entonces, la información de Montgomery sobre las elecciones parece más confiable que la de Baloyra. A veces, una intuición basada en sólidos principios puede ser más acertada que un juicio apoyado en evidencia tangible pero frágil y parcial.

Compartimos el juicio de Román Mayorga Quirós en su introducción al libro de Montgomery. Este trabajo y el de Baloyra son los mejores libros sobre El Salvador en los últimos diez años, desde los magníficos análisis de Thomas Anderson, David Browning y Alastair White. La lectura de ambos deja una impresión muy positiva.

MANUEL A. CHAVARRÍA

LUIS MAIRA, *Chile: autoritarismo, democracia y movimiento popular*, México, Ediciones CIDE, 1984, 331 pp.

La experiencia de la Unidad Popular en Chile y su desenlace autoritario han dado lugar a numerosas polémicas sobre la "vía institucional al socialismo". Esta vía implica un reto, el de convertir la sociedad democrática (igualitaria, pluralista, que expresa a las mayorías y que tiene una política exterior independiente) en un modelo capaz de extenderse. El libro de Luis Maira, político y académico chileno, analiza el desarrollo político de Chile, en especial en los periodos del Dr. Salvador Allende y de la actual dictadura militar. Es un conjunto de artículos de calidad variable, presentados por el autor en seminarios y actos académicos en los últimos diez años, cuyo objeto es interpretar ambos gobiernos a la luz de la experiencia histórica de Chile y proponer las bases de un proyecto político alternativo.

El autor procura situar históricamente el cuadro político chileno de 1970. Chile, tempranamente consolidado como Estado-Nación, con un profundo desfase entre su desarrollo económico y su desarrollo político, había logrado establecer desde la Constitución conservadora de 1888 lo que Diego Portales denominó "el Estado en forma". Esto significó que en un sistema político inclusivo las luchas tuvieron lugar —con fuerte carga ideológica— en el terreno electoral, sin que los militares dieran golpes de Estado. En un sistema político estable desde 1932, en el que se daba mucha competencia entre partidos, el esquema tripolar de fuerzas (Democracia Cristiana, derecha y Unidad Popular) condujo a una división del electorado en 1970 y a la negociación del triunfo del candidato de la Unidad Popular.

El autor destaca el ensanchamiento de la base ideológica de la izquierda chilena en un contexto internacional favorable al "experimento chileno" gracias a la política de distensión de las superpotencias, la admisión de la República Popular China a las Naciones Unidas, el fracaso del bloqueo norteamericano contra Cuba y cierta convergencia de la Unidad Popular con los gobiernos de países vecinos (el de Velasco Alvarado en Perú, el de Juan José Torres en Bolivia). No obstante, señala Maira, el carácter nacionalista y antiimperialista del programa de la Unidad Popular la llevó a un enfrentamiento con Estados Unidos. "En torno al proceso de nacionalizaciones radicó el conflicto entre el gobierno constitucional de Chile y el de Estados Unidos. Este último actuó como agente directo de las grandes corporaciones transnacionales y desató lo que el presidente chileno calificó en su discurso de las Naciones Unidas como un bloqueo invisible" (p. 32). Las actividades de la CIA, el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la interrupción de la asistencia técnica y las acciones de empresas norteamericanas, desestabilizaron al gobierno democrático en Chile. El proyecto nacional de la Unidad Popular, transformador del orden político y social interno, establecía medidas para reorientar el poder en favor de las mayorías mediante la reforma agraria, la consolidación del área de propiedad social, la participación popular, la nueva política de defensa nacional vinculada a las tareas del desarrollo económico, y la transformación de la cultura en patrimonio del pueblo.

Otra idea básica de Luis Maira es la de una alteración del “equilibrio institucional” formalizado en la Constitución presidencialista de 1925, al romperse el modelo político mediador o de negociación que caracterizaba a la democracia representativa. La estructura del Estado, que el autor analiza marginalmente, en nuestra opinión es la clave para explicar el proceso político chileno. El tema del poder del Estado lleva a cuestionar la vigencia de un modelo de sociedad en agotamiento y a plantear las posibilidades de sustituirlo. Luis Maira concluye que la solución al conflicto institucional habrá de buscarse fuera del aparato del Estado.

El autor examina también la estrategia y las tácticas de los grupos dominantes insurrectos. Presenta las alternativas políticas para los católicos, que van de la Democracia Cristiana a la Teología de la Liberación. Según Luis Maira, las dictaduras militares tradicionales corresponden a una etapa en la que las oligarquías terratenientes detentan la hegemonía política, dirigidas por partidos conservadores o liberales con el apoyo de la Iglesia (p. 163). En cambio, los actuales regímenes militares, que maduraron “luego de la reorganización internacional del proceso productivo que se inicia al término de la Segunda Guerra Mundial” (p. 164), procuran justificarse invocando el proceso de industrialización y urbanización. Habría que añadir, creemos, que la instauración de las nuevas dictaduras militares obedece a una reorganización estructural del sistema político y económico, mediante la cual las fuerzas armadas se apoderaron del poder completamente y con un proyecto de largo plazo. Las nuevas formas de autoritarismo militar se basan en una doctrina de seguridad nacional y en una visión internacional de guerra fría.

Maira destaca las primeras dificultades del gobierno militar chileno en 1978, a saber, su incapacidad para eliminar del escenario político al sector popular no obstante el ejercicio del terrorismo de Estado. La “consulta nacional” del 4 de enero de 1978 pretendía la legitimación forzosa del proyecto dirigido por el general Pinochet. La ruptura de relaciones con Bolivia, el conflicto con Argentina por el Canal de Beagle, el deterioro de las relaciones con Estados Unidos a raíz de la investigación norteamericana del asesinato del ex-canciller Orlando Letelier, contribuyeron a crear las condiciones de esta primera crisis. La Constitución de 1980 consagró la dictadura hasta 1989. Las alternativas del movimiento popular chileno, más allá de negociar acuerdos con el sistema dictatorial, son una responsabilidad que “recae fundamentalmente sobre las propias fuerzas de izquierda y sobre su capacidad para desarrollar la movilización del movimiento popular” (p. 241). El deterioro de las bases de apoyo del gobierno militar (trabajadores del cobre y transportistas), los problemas del círculo financiero y exportador beneficiado por el supuesto “milagro chileno”, y la violación constante de los derechos humanos, han provocado una ruptura entre la sociedad civil y el Estado.

El último capítulo estudia —objetivo principal del libro— las perspectivas del proceso de democratización en Chile. Maira sostiene que 1983 fue un “año límite”. Estaríamos en presencia de una crisis estructural del sistema de dominación; se habrían agotado “las exigencias del liderazgo político del general Pinochet y las orientaciones técnicas de los *Chicago boys*” (p. 249). (En nuestra

opinión, se ha configurado un “cesarismo presidencial” en el que las peculiaridades de la institución armada chilena “verticalista” explican el control, hasta ahora absoluto, del general-presidente sobre los altos mandos militares y el conjunto de la sociedad.) Sin embargo, la crisis económica actual no acarrea automáticamente una derrota política. Las alternativas de recomposición del régimen pueden incluir un proyecto de inspiración netamente fascista, con un fuerte componente populista.

El libro de Luis Maira, oportuno y esclarecedor, invita a reflexionar sobre el futuro de los procesos de democratización al término de las experiencias de liberalismo económico y autoritarismo político. La discusión de proyectos alternativos con que el autor concluye su obra, sugiere que hace falta imaginación creadora para constituir una sociedad democrática y humanista.

LUIS DÍAZ MULLER

ISABEL TURRENT, *La Unión Soviética en América Latina: el caso de la Unidad Popular chilena, 1970-1973*, México, El Colegio de México, 1984, 270 pp.

En México, hablar sobre la Unión Soviética es abrir una discusión en la que frecuentemente se oponen pasiones mezquinas. Es realmente difícil tener una perspectiva más o menos independiente cuando se pretende poner en tela de juicio a una de las dos grandes potencias del mundo contemporáneo, y el resultado frecuente de las polémicas es la polarización extrema. Moscú y Washington no sólo representan el objeto de análisis, sino que constituyen la fuente de opinión. De ahí la necesidad de una escuela mexicana de soviología. Hay mexicanos interesados en acercarse con afán crítico y cierta objetividad —hasta donde sea posible— a la problemática generada por la política exterior de la Unión Soviética hacia América Latina. Isabel Turrent nos presenta un análisis que conjuga la riqueza de las fuentes bibliográficas y hemerográficas con acertadas y sugerentes entrevistas a personas que vivieron de cerca el “experimento chileno”. Su rigor crítico tiene un firme respaldo metodológico.

Turrent señala que el objetivo central de su trabajo es describir la visión que tiene el Kremlin de Latinoamérica. De paso, el estudio refuta —aunque no muy explícitamente— la “teoría de la penetración soviética” que han elaborado investigadores norteamericanos, principalmente León Gouré y Morris Rothenberg de la Universidad de Miami. Dicha teoría, con su dedicatoria a América Latina, es el objeto de una crítica velada pero continua en el libro de Turrent, quien no la combate, sin embargo, con tesis diametralmente opuestas. La autora distingue muy bien los matices en la formulación de la política exterior soviética. Por consiguiente, descarta la “tesis monolítica” que sostiene la promoción de la “revolución mundial” como única meta de la Unión Soviética en el exterior.

El ascenso de la Unidad Popular, que condujo a Salvador Allende a la presidencia de Chile en 1970, planteó dificultades teóricas y prácticas a la política exterior de la Unión Soviética. Pese a que los soviéticos habían formulado conceptos como los de “Estado nacional democrático” en 1960 y “democracia revolucionaria” en 1963, el caso de la Unidad Popular se dio en un momento histórico muy peculiar. La Unión Soviética había adoptado una política de franca *détente* con Occidente, que obligaba a su gobierno a no actuar de manera violenta en zonas de influencia norteamericana. Si bien el caso cubano demostró a Moscú que no debería considerar los factores geográficos como una fatalidad en sus cálculos geopolíticos, los analistas soviéticos vieron el experimento del socialismo chileno con demasiada reticencia, al menos en un principio. Turrent sugiere que el deseo de Allende de edificar el socialismo en Chile representó un intento más o menos autónomo, y que la Unión Soviética permaneció distante inicialmente: el discurso de los líderes del Kremlin evitó expresar, a toda costa, un compromiso abierto con el “experimento chileno”.

En el plano doctrinal, la disputa chino-soviética se tradujo en el apoyo de Pekín a la “vía armada” al socialismo, y en el sostenimiento de la “vía pacífica” por parte de Moscú. La llegada de Brezhnev al poder, en 1964, volvió aún más pragmática la política exterior de su país. Si pragmatismo quiere decir ambigüedad ideológica, es muy obvio en la concepción que tiene la Unión Soviética de Latinoamérica. Para el Tercer Mundo se había acuñado, en la segunda mitad de los años sesenta, un nuevo enfoque teórico soviético: el “camino no capitalista de desarrollo”. Este enfoque, sin embargo, no se tradujo en acciones concretas hacia Chile. Turrent señala que la Unión Soviética prefirió la cautela y el realismo; por eso, concluye, ni en la doctrina ni en la *praxis* América Latina era terreno fértil para edificar el socialismo en una época de distensión internacional y coexistencia pacífica. Moscú prefirió entonces comportarse como “potencia clásica”, es decir, abandonó su carácter de líder ideológico para prestar atención a cuestiones más apremiantes como la búsqueda de un mayor intercambio tecnológico y comercial con Occidente.

La autora analiza también la relación partido-Estado, cauce especial abierto para Chile además de las relaciones que los soviéticos establecen normalmente entre Estados y entre partidos, revelador de que la Unión Soviética esquivó el compromiso abierto. Chile era un riesgo económico para el Kremlin, consciente de la posibilidad de que en 1976 el proceso democrático desplazara a la Unidad Popular y elevara al poder a otro partido. De ahí que la Unión Soviética no haya brindado ayuda económica al gobierno de Allende para proyectos a largo plazo.

Si Cuba es el bastión más seguro de los soviéticos en América Latina, conviene examinar la relación de Fidel Castro con Salvador Allende. El apoyo inicial de La Habana a Santiago revela un mayor acercamiento entre Cuba y Chile que entre Chile y la Unión Soviética. Turrent menciona algunos intercambios, por ejemplo, el comercio entre Cuba y Chile (20 millones de dólares en 1971).

Después de enfrentar serios problemas económicos y políticos —la huelga de transportistas en octubre de 1972 y la ostensible injerencia de Washington

para entorpecer el gobierno de Allende— la Unidad Popular buscó apoyo en el exterior. Salvador Allende viajó a varios países para denunciar la política de Nixon y solicitar ayuda financiera y técnica. En contra de lo esperado, la visita de Allende a Moscú produjo magros resultados. Para comienzos de 1973, las relaciones entre Chile y la Unión Soviética eran tan frías como al inicio del “experimento chileno”. El resto de la historia es conocido: el 11 de septiembre de 1973 Allende fue derrocado por un golpe de Estado que organizó el ala derecha del ejército.

El libro de Turrent sugiere que el poderío de la Casa Blanca y el del Kremlin definieron, por acto u omisión, el destino del gobierno de la Unidad Popular. Por eso hay que eludir los polos de la discusión, antisovietismo furibundo y prosovietismo complaciente, para explicar los comportamientos en términos de intereses y de poder. La perspectiva de Turrent muestra que no está reñida con las ideologías pero que es más amiga de la verdad.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

LUIS DÍAZ MÜLLER, *América Latina y el nuevo orden internacional*, México, Grijalbo, 1982, 153 pp.

El presente trabajo, en palabras de su prologuista, César Sepúlveda, es un “ensayo genuinamente latinoamericano” y una valiosa aportación al conocimiento del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). El propósito central de Díaz Müller es “avanzar en el estudio del SELA”, mecanismo que “representa el intento más dinámico y coherente por recobrar la idea de la unidad latinoamericana” y que puede “contribuir a cerrar la brecha de la dependencia”.

El SELA es un conjunto de relaciones entre gobiernos latinoamericanos. Los propósitos generales de su proyecto —propuesto por México y Venezuela en 1974, con la anuencia de los demás participantes— son fomentar la cooperación regional; apoyar los procesos de integración de la zona; promover programas y proyectos económicos de interés para dos o más miembros; actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina para definir posiciones comunes frente a terceros; luchar por que se otorgue un trato preferencial a las naciones de menor desarrollo económico. Constituido en octubre de 1975, el SELA retoma la idea de la unidad latinoamericana (que desde 1826 planteó Simón Bolívar) para hacer frente a dos obstáculos: el carácter de los sistemas políticos nacionales (autoritarios y militares en su mayoría, opuestos a cualquier proceso de integración) y el nuevo eje de dominación que impera en Latinoamérica (la “triada del poder imperial” que conforman el militarismo de inspiración fascista, los conglomerados transnacionales y los grupos locales dominantes). Paradójicamente, el SELA podría beneficiarse de que la

“triada” haya aniquilado los sistemas económicos nacionales. En el plano político, el apoyo de amplios sectores populares fortalece al sistema.

El SELA nace vinculado a las declaraciones que propugnan un Nuevo Orden Económico Internacional. Es un primer paso para terminar con la situación de dependencia, pero no pretende romper con el capitalismo sino superar las deficiencias de esquemas de integración previos. El SELA expresa un nuevo tipo de cooperación propicia al desarrollo autónomo. Lo han impulsado sectores sociales interesados en ampliar el mercado latinoamericano para desafiar a los conglomerados transnacionales. El SELA cubre varios aspectos de la relación entre los Estados latinoamericanos: intercambios de diversos tipos y vínculos que inducen la integración. La base del Sistema es la conciencia de la crisis y del atraso regional.

La organización interna del SELA comprende tres mecanismos: el Consejo Latinoamericano, integrado por un representante de cada Estado miembro; la Secretaría Ejecutiva, con un secretario elegido cada cuatro años; y los Comités de Acción, de carácter temporal y abiertos a la participación de todos los miembros. El SELA es un organismo distinto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un foro latinoamericano creado para defender los recursos regionales. Además de promover la integración, el Sistema permite la coordinación y la cooperación de los países de América Latina entre sí y con el exterior. Es un mecanismo de consulta que puede proyectar su poder negociador.

Las demandas y quejas de los países subdesarrollados apuntan hacia la necesidad de un nuevo orden internacional (económico, político, social y jurídico); un proceso de negociaciones permitirá lograrlo. Las propuestas para ese nuevo orden repudian la vieja noción de que la riqueza de los países industrializados beneficia a las naciones pobres. La CEPAL, el Movimiento de los No Alineados, el Grupo de los 77 y las Conferencias de la UNCTAD han buscado remedio a las circunstancias adversas que padece el mundo subdesarrollado, cuyas reivindicaciones quedaron plasmadas en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, así como en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ambas de 1974. También algunos estudios, como los Informes del Club de Roma, los de la Fundación Dag Hammarskjöld o los de la Fundación Bariloche, han diagnosticado bien los problemas del subdesarrollo, aunque tienden a ser muy formalistas y a ignorar las realidades del poder.

En este marco, el SELA propone la solidaridad continental y la cooperación (sobre todo económica) entre los países latinoamericanos como vía hacia la integración regional. El SELA es una de las propuestas para un sistema internacional democrático y justo. Su pragmatismo y su versatilidad le facilitan la búsqueda de soluciones a los problemas comunes de los países miembros. En el exterior, el Sistema tiene capacidad negociadora que ejerce con sentido comunitario para coadyuvar a la reestructuración del orden mundial.